



FUNDACION FELIPE HERRERA LANE

INFORME DE TENDENCIAS DICIEMBRE 2022

El acuerdo para darle continuidad al proceso constituyente

Es un acuerdo de compromiso, que deja espacios a la crítica facilista o principista. Qué duda cabe. Un largo y laborioso acuerdo en donde todos tuvieron que ceder de sus posturas iniciales. La derecha postulaba una instancia de composición mixta, con la participación de expertos, designados por el parlamento, con derecho a voz y voto, en tanto que el oficialismo aspiraba a una instancia íntegramente elegida, en un número de 99 integrantes, asesorados por expertos. Las negociaciones se dilataron a lo largo de tres meses, haciendo temer que pudieran fracasar, poniendo en riesgo la continuidad del proceso constituyente.

Al final, primó la cordura, arribando a un acuerdo de compromiso. Con una instancia de 50 miembros, íntegramente elegida, de manera paritaria, con representantes de las etnias originarias, en proporción a los votos obtenidos, como supernumerarios, además de 24 expertos, elegidos por la cámara de diputados y el senado en proporciones iguales, encargados de redactar una primera propuesta para ser sometida a la deliberación del consejo constituyente, con derecho a voz y un rol protagónico en la etapa de armonización. En estricto rigor, no es una instancia mixta, pero casi.

El acuerdo no tan sólo fue rechazado por los republicanos y el partido de la gente, sino también fuertemente criticado por amplios sectores de la derecha, que estiman que se hicieron concesiones excesivas al oficialismo. Así como del propio oficialismo, que estiman que la instancia acordada, el consejo constituyente está excesivamente tutelada y constreñida, tanto por los expertos, (que aún no se definen), como los llamados bordes o principios y el sistema de arbitraje, que deben enmarcar el nuevo proceso constituyente y velar por su fiel cumplimiento.

El acuerdo aún debe pasar por la aprobación del parlamento, para transformarse en una reforma constitucional que posibilite el nuevo proceso constituyente. Y no son pocos los parlamentarios que aspiran a introducirle modificaciones a través de indicaciones.

Así lo ha planteado formalmente el partido Comunes, integrante del Frente Amplio, al igual que Flavia Torrealba, presidente de la Federación regionalista verde social (FRVS), en tanto que diversos sectores del partido comunista han expresado ácidas críticas al contenido del acuerdo, aspirando a introducirle modificaciones en el trámite parlamentario. La senadora Claudia Pascal fue la encargada de defender el acuerdo en la reciente reunión del comité central, argumentando que el acuerdo alcanzado fue el único posible y representa la posibilidad de superar la actual constitución.

Por su parte, dirigentes de Renovación Nacional y de la UDI, han interpelado duramente a sus directivas por suscribir un acuerdo que no ha sido aprobado por las bases partidarias. La propia defensa de Pablo Longueira a Javier Macaya, que diversos sectores de la derecha tildan de traidor, muestra las resistencias de ese partido al acuerdo.

Resta por conocer la postura de los independientes y los llamados díscolos, tanto de derecha como de izquierda, que no se sienten representados por los partidos que suscribieran el acuerdo. Entre otros, los diputados que renunciaran al partido de la gente. O el caso de Pamela Jiles o René Alinco.

Pese a estas inquietantes señales, los dirigentes de los partidos suscriptores del acuerdo han expresado su confianza en que los votos para aprobar el acuerdo y materializarlo en una reforma constitucional que permita el inicio del nuevo proceso constituyente-4/7 del parlamente- finalmente estarán.

Pero todo apunta a que no será un trámite corto e expedito. Los parlamentarios pueden presentar y con toda seguridad presentarán indicaciones que extenderán los plazos para su tramitación, imposibilitando que se cumpla el itinerario propuesto en el acuerdo.

Sin embargo, es muy improbable, para no decir imposible, que el trabajoso acuerdo alcanzado por los partidos que lo suscribieran, pueda ser modificado sustancialmente en su tramitación parlamentaria. Tanto Chile Vamos como el oficialismo han asumido como un acuerdo de carácter vinculante, asumiendo que cualquier modificación sustancial conlleva el riesgo de hacerlo naufragar, imposibilitando su aprobación por los 4/7 del parlamento.

El gobierno no ha dudado en celebrar un acuerdo que permite destrabar el proceso constituyente. Fue el propio presidente de la república el que afirmara que un acuerdo imperfecto era preferible a un no acuerdo, en lo que se interpretó como una apertura a una instancia mixta. El acuerdo alcanzando es mejor que esa alternativa.

Por su parte, los empresarios han salido a apoyar un acuerdo que permite disminuir la incertidumbre en materia constitucional y proyecta la posibilidad de tener una constitución “moderada”, apoyada por las diversas fuerzas políticas mayoritarias.

Al final, los méritos o deméritos del acuerdo, más allá que permita destrabar el proceso constituyente, deberá ser evaluado por sus resultados. Es más que evidente que los contenidos de una nueva constitución deberán ser pactados por las fuerzas políticas con representación parlamentaria, lo cual puede contribuir a la estabilidad constitucional.

Todo el tema son los términos de ese pacto. Y aunque el debate aparece acotado por la definición de los llamados bordes o principios, tutelados por el sistema de arbitraje, existen claras diferencias y tensiones que el nuevo consejo constitucional debe resolver adecuadamente. Como la evidente tensión entre el derecho de propiedad, defendido por la derecha, y los nuevos derechos sociales garantizados, la superación del estado subsidiario por un estado social y democrático de derechos, o la indispensable reforma del sistema político y electoral

En enero debe instalarse el comité de expertos para empezar a redactar la propuesta de nueva constitución que deberá ser sometida a la consideración del consejo constituyente, que deberá ser elegido en abril o mayo.

Desde ya los partidos barajan nombres para ambas instancias, así como pactos y alianzas para enfrentar las próximas elecciones de consejeros constitucionales. A este respecto, la derecha tiene un problema para incluir en ese pacto a los republicanos, así como el partido de la gente, contrarios al acuerdo, pero podría sumar a Amarillos que, en general, se alineó con Chile Vamos en las negociaciones por el acuerdo.

Por su parte, el oficialismo está desafiado a generar un pacto o alianza que no tan sólo incluya a las dos coaliciones que apoyan al gobierno, sino también a la DC y eventualmente Demócratas, si es que están disponibles, con el objeto de maximizar su representación en el futuro órgano constituyente, que se elige según las normas del senado.

De la misma manera, los dirigentes de los partidos suscriptores del acuerdo deben cerrar todos los espacios de disidencia o discolaje en su interior.

Aún no existen encuestas que midan el impacto del acuerdo para darle continuidad al proceso constituyente. A riesgo de especular, se podría suponer que una mayoría ciudadana debería apoyar que se haya arribado a un acuerdo que garantiza que el país tendrá una nueva constitución, que sigue contando con el apoyo de una amplia mayoría. La duda es como aquello pueda traducirse en el plano electoral, aunque resulte evidente que ningún sector tendrá una mayoría aplastante para imponer sus puntos de vista y deberán negociarse los acuerdos. Como pasa en las democracias.

El acuerdo constitucional y las reformas emblemáticas del gobierno

Aun cuando el nuevo proceso constituyente y las reformas emblemáticas del gobierno-tributaria, previsional y de salud- corren por carriles paralelos, es más que evidente que el acuerdo para darle continuidad al proceso constituyente, disminuye la incertidumbre sobre la materia y facilita el debate en torno a las reformas impulsadas por el gobierno. Así lo ha reconocido el propio ministro de hacienda al celebrar el acuerdo y otro tanto han hecho los propios dirigentes empresariales.

Sin embargo, tanto la reforma tributaria como la reforma previsional, deben recorrer un largo trecho y superar importantes diferencias, antes de poder ser aprobadas. En

especial, la reforma previsional ha generado una gran resistencia de parte de las administradoras privadas, que buscan proteger su lucrativo negocio, desplegando una millonaria campaña mediática, insistiendo en la libre elección del sistema de administración, la propiedad de los ahorros y su heredabilidad, así como el incremento del aporte del 6 % a las cuentas individuales,

El gobierno debe asumir que una parte de la batalla por la reforma previsional se juega ante la opinión pública, que debe poder entender, con claridad meridiana que la reforma es beneficiosa no tan sólo para un sector sino para todos, que verán incrementadas sus pensiones, asegurando pensiones mínimas garantizadas y menores costos de administración, sin poner en riesgo la propiedad de sus ahorros.

La designación del nuevo fiscal nacional

En forma más bien sorpresiva, tras fracasar la nominación de José Morales como nuevo fiscal nacional, el gobierno se inclinó por Marta Herrera como la candidata propuesta al senado, sin tener asegurado los votos. Un nombre que ya había sondeado, con malos resultados, en el proceso anterior.

Marta Herrera, de dilatada trayectoria en la fiscalía, es cuestionada por representar una supuesta continuidad con la gestión del fiscal saliente, Jorge Abbott, además de sus hipotéticos vínculos con el oficialismo.

La UDI, anunciando que votarán en contra de la nueva propuesta, no ha dudado en acusar al gobierno de una verdadera provocación, insinuando que se trata de una maniobra política, que busca iniciar un nuevo proceso, en donde pueda elegir un nombre más cercano a los perfiles que buscan para un (a) nuevo (a) fiscal nacional.

Se así fuera, es una maniobra no exenta de costos políticos, sumando una nueva derrota, que contribuiría a debilitar a la actual ministra de justicia y poner en tela de juicio la función del ministerio público.

Son muchas las críticas a la gestión del ex fiscal nacional, Jorge Abbott. Tanto desde la derecha, en temas tan controversiales como el financiamiento ilegal de la política (en donde hasta ahora se ha condenado a personeros de la derecha), como desde sectores de la izquierda. Algunas de esas críticas pueden tener fundamentos. Otras son más que discutibles. (como las famosas clases de ética para los ejecutivos de PENTA, determinadas por un tribunal y no por la fiscalía), o los impedimentos legales para perseguir algunos presuntos delitos por oficio. Pero poco se habla de las debilidades del ministerio público. De sus problemas de recursos, la falta de fiscales y las excesivas causas que deben llevar.

Es más que evidente que el ministerio público requiere de profundas reformas, entre ellas el propio sistema de designación del fiscal nacional, así como un importante reforzamiento, para jugar un rol más protagónico y eficaz en la persecución de los delitos.

Un eventual rechazo del senado a la nueva propuesta del ejecutivo, implica un nuevo traspie para el gobierno, agregando serias interrogantes en este complejo proceso de designación de un nuevo fiscal nacional.

Un nuevo acuerdo en torno a seguridad ciudadana

Los diálogos entre el gobierno y la oposición para alcanzar un nuevo acuerdo en materia de seguridad ciudadana han avanzado y se podría materializar en los próximos días o semanas, luego que el gobierno asumiera el tema como una de sus principales prioridades, frente al incremento de delitos con violencia que se suceden a lo largo del país.

Uno de los temas más controversiales está dado por la actual ley antiterrorista, que ha mostrado sus límites e imperfecciones a lo largo de su vigencia. Existe consenso que esa ley debe ser modificada, pero subsisten importantes diferencias respecto del sentido de estas modificaciones.

También parece existir amplio consenso en la necesidad de modernizar el sistema nacional de inteligencia nacional, apuntando a una mayor coordinación de los servicios policiales, las FF.AA. y la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI). Una coordinación que ha venido produciéndose progresivamente pero que requiere de un mando coordinador, que dependa directamente de la presidencia de la república, con mayor tecnología y recursos para hacerla más eficiente.

Un tema muy sensible en materia de seguridad es la protección de las fronteras y la manera de contener la inmigración ilegal, que bien pudiera incrementarse con las convulsiones políticas que se viven en Perú.

El despliegue de las FF.AA. en la frontera norte aparece como una medida necesaria pero no suficiente sino se implementa una consistente política migratoria que regule de mejor manera el flujo de inmigrantes y permita la deportación de los ilegales.

De igual manera, parece indispensable insistir en la búsqueda de una mayor cooperación con los países vecinos para contener el flujo migratorio. Sin lugar a dudas es más complejo en el caso de Bolivia, país con el cual no tenemos relaciones diplomáticas. Sin embargo, el reciente fallo del Tribunal internacional de La Haya sobre el Silala, abre condiciones para reponer una agenda, en donde el tema migratorio y el combate a las mafias que operan en las fronteras, es de mutuo interés.

El tema de la Araucanía, no siendo esencialmente un tema de seguridad nacional, es más que evidente que lo incluye. El gobierno debe buscar un diálogo político con las etnias originarias, que incluye su reconocimiento constitucional, activas políticas de reparación, devolución de tierras y políticas de desarrollo productivo, en tanto que debe concentrar sus esfuerzos para combatir el crimen organizado que opera en la zona.

El estado de excepción constitucional no puede prolongarse indefinidamente, pero se debe reforzar la dotación policial y buscar la cooperación permanente de las FF.AA. para resguardar la infraestructura crítica y prevenir nuevos atentados.

Capítulo aparte son los actos de violencia que se registran en algunos liceos emblemáticos de la capital, que parecen corresponder a sectores anti sistémicos, en donde los propios apoderados de estos alumnos pueden tener buena parte de la responsabilidad.

Alguna relación con estos actos tiene la crisis de confianza en la política y los partidos, que tiende a extenderse en amplios sectores de la sociedad. Tanto el gobierno como el parlamento y los propios partidos políticos comparten la responsabilidad de devolver a la política su sentido de servicio público. Una política fundada en valores y principios claros, con mayor transparencia y sentido de responsabilidad, así como la necesidad de reconstruir sus lazos con la sociedad, que permitan superar esa crisis de confianza y representación que hay afecta a las organizaciones políticas.

FUNDACIÓN FELIPE HERRERA
PDTE. JUAN ANTONIO RÍOS N° 58 – PISO 3 (26 33 99 79)